UNITED NATIONS

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

Distr.
GENERAL

E/CN.7/1992/13
1 April 1992

ENGLISH
ORIGINAL: SPANISH

COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS
Thirty-fifth session
Vienna, 6-15 April 1992
Item 3 of the provisional agenda*

GENERAL DEBATE

Letter dated 23 March 1992 to the Executive Director of the United Nations International Drug Control Programme from the Ambassadors of Bolivia, Colombia, Ecuador, the United States of America, Mexico, Peru and Venezuela

We have pleasure in writing to you regarding the thirty-fifth session of the Commission on Narcotic Drugs, which will be held in Vienna from 6 to 15 April 1992.

We recognize that the global drug problem is a constant threat to the health and well-being of our peoples, and also to their economies, national security and harmonious international relations and we are pleased to note the progress achieved during the last two years in the fight against drug trafficking.

We consider that the Commission on Narcotic Drugs is a very important international forum in which thought and action can be joined to present a united front against this scourge.

Consequently, we believe that the declaration formulated by our senior leaders at the Drug Summit held at San Antonio, Texas, USA, from 26 to 27 February 1992, reflects the conceptual and political focus that needs to be placed on this serious problem. We therefore think it advisable for the Declaration of San Antonio to be officially circulated during the thirty-fifth session so that it may be widely disseminated and acquire the importance it deserves.

(Signed) A. Gastón Ponce Caballero
Ambassador of Bolivia

(Signed) Alfonso Gómez Méndez
Ambassador of Colombia

(Signed) Jorge Pareja Cucalón
Ambassador of Ecuador

(Signed) Jane E. Becker
Ambassador of the United States of America

(Signed) Eugenio Anguiano Roch
Ambassador of Mexico

(Signed) Alberto Salas Barahona
Chargé d'Affaires a.i. of Peru

(Signed) Santiago Ochoa Antich
Ambassador of Venezuela

* E/CN.7/1992/1

V.92 52972 2836E

Anexo*

CUMBRE SOBRE DROGAS EN SAN ANTONIO, 1992

Nosotros, los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y los Estados Unidos de América y el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, reunidos en San Antonio, Texas, el 26 y 27 de febrero de mil novecientos noventa y dos, formulamos la siguiente

DECLARACION DE SAN ANTONIO

Reconocemos que la Declaración de Cartagena, emitida el 15 de febrero de 1990 por los Presidentes de Bolivia, Colombia, Perú y los Estados Unidos de América, sentó las bases para el desarrollo de una estrategia integral y multilateral para confrontar el problema de las drogas ilícitas. Por ello, quienes representamos a los países que se reunieron en Cartagena, reafirmamos vigorosamente los compromisos que fueron asumidos en ese momento. Reunidos ahora como representantes de siete Gobiernos, expresamos nuestra disposición a ir más allá de los logros de Cartagena, construir sobre el progreso alcanzado, y adecuar la cooperación internacional a los nuevos retos que surgen de los cambios mundiales experimentados en el problema de la droga.

Reconocemos que el problema global de las drogas ilícitas y los delitos conexos representan una amenaza directa a la salud y el bienestar de nuestros pueblos, a sus economías, a la seguridad nacional de nuestros países y a la armonía de las relaciones internacionales. Las drogas inducen a la violencia y a la farmacodependencia; constituyen una amenaza a las instituciones democráticas y un desperdicio de recursos económicos y humanos que podrían ser canalizados en beneficio de nuestras sociedades.

Vemos con agrado los avances alcanzados durante los últimos dos años en reducir la producción y la demanda de cocaína, en disminuir los cultivos para fines ilícitos, en ejecutar los programas de desarrollo alternativo y en desmantelar y desbaratar las organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, así como sus redes de respaldo financiero. La estrecha cooperación entre nuestros gobiernos y la voluntad política de los mismos han dado como resultado un aumento alentador en la incautación de drogas y en la eficacia de las acciones de la aplicación de la ley. Asimismo, como resultado de esta cooperación y voluntad política, varios de los principales mandos vinculados activamente al comercio de la droga hace dos años se encuentran en prisión en varios países. Los programas de desarrollo alternativo han demostrado ser una estrategia eficaz para sustituir los cultivos de la coca en los países productores.

---

* Se distribuye únicamente en los idiomas en que se ha presentado.

Si bien nos sentimos motivados por esos logros, reconocemos que las acciones de cooperación mutua deben ser ampliadas y fortalecidas en todos los campos. Exhortamos a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los medios de comunicación, a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra las drogas. El papel de los medios de comunicación es muy importante, y los convocamos a intensificar sus valiosos esfuerzos. Nos comprometemos a promover, a través de los medios de comunicación, los valores indispensables para una sociedad sana.

Además del problema de la cocaína, reconocemos la importancia de permanecer alertas frente al incremento de la producción, el tráfico y el consumo de heroína, marihuana y otras drogas. Enfatizamos la necesidad de ejercer mayor control y fiscalización de las sustancias que se utilizan en la producción de estas drogas y de ampliar las consultas sobre acciones de erradicación de estos cultivos ilícitos.

Estamos convencidos de que nuestras acciones contra las drogas deben llevarse a cabo sobre la base del principio de las obligaciones compartidas y en forma equilibrada. Es esencial enfrentarnos al problema con un enfoque integral que incluya la demanda, los cultivos con fines ilícitos, la producción, el tráfico y las redes ilegales de distribución de drogas, al igual que los delitos conexos como el tráfico de armas, de productos químicos esenciales y precursores y el lavado de dinero. Asimismo, nuestros Gobiernos continuarán perfeccionando estrategias que comprendan el desarrollo alternativo, la erradicación, el control y la interceptación, el fortalecimiento de los sistemas judiciales y la prevención del consumo de drogas ilícitas.

Reconocemos la importancia fundamental de fortalecer los sistemas judiciales para asegurar que existan instituciones eficaces para someter a la justicia a quienes delinquen. Asumimos la responsabilidad de fortalecer la cooperación judicial entre nuestros países para alcanzar estos objetivos. Reafirmamos nuestra intención de llevar a cabo estos esfuerzos, en estricto cumplimiento del régimen legal internacional para la protección de los derechos humanos.

Reafirmamos que la cooperación mutua debe llevarse a cabo de conformidad con las respectivas legislaciones nacionales y con pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de nuestros Países y estricta observancia del derecho internacional.

Reconocemos que el problema de las drogas ilícitas es internacional. Todos los países directa o indirectamente afectados deben asumir obligaciones y acciones claras en la lucha contra ese problema. Exhortamos a los países de la región a fortalecer las

acciones nacionales y de cooperación internacional en la lucha contra las drogas y a participar activamente en los programas regionales. Reconocemos que, en el caso del Perú, la complicidad entre el narcotráfico y el terrorismo perturba en gran medida la acción contra las drogas, amenaza a las instituciones democráticas y menoscaba la viabilidad de la economía peruana.

Nos solidarizamos con la lucha contra las drogas que realizan los Países hermanos de las Américas, exhortándolos a redoblar esfuerzos, y ofreciéndonos a estrechar con ellos la cooperación de nuestros Gobiernos mediante los acuerdos específicos que deseen celebrar. Valoramos la importancia de la unidad hemisférica en este esfuerzo y la alentamos.

Observamos con preocupación que en Europa y Asia se abren y expanden los mercados para la comercialización de las drogas ilícitas, particularmente la de la cocaína. Exhortamos a las naciones de estos continentes y a los otros miembros de la comunidad internacional a que, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, estrechen la cooperación en la lucha contra las drogas en la que están comprometidos los países del Hemisferio Americano. En este sentido, hemos convenido formar un grupo de alto nivel, con representantes designados por los países firmantes de la Declaración, para que visite a otros países de este Hemisferio, de Europa y el Japón con el objeto de invitarlos a participar activamente en los esfuerzos y las estrategias de cooperación que se consignan en la misma.

Ratificamos nuestro decidido compromiso en la lucha contra las drogas de las organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Inspirados en su mandato, expresamos nuestro pleno respaldo a los programas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.

Reconocemos la importancia fundamental de contar con economías fuertes e iniciativas económicas innovadoras para tener éxito en la lucha contra las drogas. Será esencial lograr mayores avances en los campos del comercio y la inversión. Apoyamos la Iniciativa para las Américas como medio para mejorar las condiciones económicas en el Hemisferio, y nos sentimos alentados por el progreso obtenido por los países de esta región en la reestructuración de sus economías.

Reafirmamos la importancia del desarrollo alternativo para la lucha contra las drogas. Tomamos nota de que también son víctimas del narcotráfico en la región aquellos sectores de la sociedad que viven en la extrema pobreza y que se ven atraídos a la producción y al tráfico de drogas ilícitas como medios de ganarse el sustento. Consideramos que para que nuestros esfuerzos

por reducir el tráfico de drogas ilícitas tengan éxito, resulta esencial ofrecer opciones lícitas que generen empleos e ingresos.

Nos proponemos alcanzar los objetivos y las metas definidas previamente en la presente Declaración y en sus Estrategias para la Acción, adjuntas.

Reconociendo la necesidad de asegurar la cohesión y el progreso de nuestras acciones contra las drogas, nuestros Gobiernos se proponen llevar a cabo anualmente una reunión de alto nivel.

Para ampliar aún más los esfuerzos internacionales en la lucha contra las drogas, invitamos a otros países o a representantes de grupos de países a unirse a esta Declaración.

Hecha en San Antonio, Texas, a los 27 días del mes de febrero de 1992, en los idiomas español e inglés.

Done at San Antonio, Texas, on this, the 27th of February, 1992, in the Spanish and English languages.

Por Bolivia
For Bolivia

Por Colombia
For Colombia

Por el Ecuador
For Ecuador

Por México
For Mexico

Por el Perú
For Peru

Por los Estados Unidos de América
For the United States of America

Por Venezuela
For Venezuela

Annex *

SAN ANTONIO DRUG SUMMIT 1992

We, the Presidents of Bolivia, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, and the United States of America, and the Minister of Foreign Relations of Venezuela, met in San Antonio, Texas, on the 26th and 27th of February, one thousand nine hundred and ninety-two and issued the following.

DECLARATION OF SAN ANTONIO

We recognize that the Cartagena Declaration, issued on February 15, 1990, by the Presidents of Bolivia, Colombia, Peru, and the United States of America, laid the foundation for the development of a comprehensive and multilateral strategy to address the problem of illegal drugs. Those of us who represent the countries that met in Cartagena strongly reaffirm the commitments assumed at that time. Meeting now as representatives of seven governments, we express our determination to move beyond the achievements of Cartagena, build upon the progress attained, and adapt international cooperation to the new challenges arising from worldwide changes in the drug problem.

We recognize that the overall problem of illegal drugs and related crimes represents a direct threat to the health and well-being of our peoples, to their economies, to the national security of our countries, and to harmony in international relations. Drugs lead to violence and addiction, threaten democratic institutions, and waste economic and human resources that could be used for the benefit of our societies.

We applaud the progress achieved over the past two years in reducing cocaine production, in lowering demand, in reducing cultivation for illicit purposes, in carrying out alternative development programs, and in dismantling and disrupting transnational drug trafficking organizations and their financial support networks. The close cooperation among our governments and their political will have lead to encouraging increase in drug seizures and in the effectiveness of law enforcement actions. Also as a result of this cooperation and political will, a number of the principal drug lords who were actively engaged in the drug trade two years ago are in prison in several countries. Alternative development programs have proven to be an effective strategy for replacing coca cultivation in producer countries.

Although we are encouraged by these achievements, we recognize that mutual cooperative efforts must be expanded and strengthened in all areas. We call on all sectors of society, notably the media, to increase their efforts in the anti-drug struggle. The role of the media is very important, and we urge them to intensify

---

* Circulated in the languages of submission only.

their valuable efforts. We undertake to promote, through the media, the values essential to a healthy society.

In addition to the cocaine problem, we recognize the need to remain alert to the expansion of the production, trafficking, and consumption of heroin, marijuana, and other drugs. We emphasize the need to exert greater control over substances used in the production of these drugs, and to broaden consultations on the eradication of these illegal crops.

We are convinced that our anti-drug efforts must be conducted on the basis of the principle of shared responsibility and in a balanced manner. It is essential to confront the drug problem through an integrated approach, addressing demand, cultivation for illicit purposes, production, trafficking, and illegal distribution networks, as well as related crime, such as traffic in firearms and in essential and precursor chemicals, and money laundering. In addition, our governments will continue to perfect strategies that include alternative development, eradication, control and interdiction, the strengthening of judicial systems, and the prevention of illicit drug use.

We recognize the fundamental importance of strengthening judicial systems to ensure that effective institutions exist to bring criminals to justice. We assume responsibility for strengthening judicial cooperation among our countries to attain these objectives. We reaffirm our intention to carry out these efforts in full compliance with the international legal framework for the protection of human rights.

We reaffirm that cooperation among us must be carried out in accordance with our national laws, with full respect for the sovereignty and territorial integrity of our nations, and in strict observance of international law.

We recognize that the problem of illicit drugs is international. All countries directly or indirectly affected by the drug problem should take upon themselves clear responsibilities and actions in the anti-drug effort. We call on the countries of the region to strengthen nationals and international cooperative efforts and to participate actively in regional programs. We recognize that in the case of Peru, complicity between narco-trafficking and terrorism greatly complicates the anti-drug effort, threatens democratic institutions, and undermines the viability of the Peruvian economy.

We express our support for the anti-drug struggle being carried out by our sister nations of the Western Hemisphere, we call on them to increase their efforts, and we offer to strengthen our governments' cooperation with them through specific agreements they may wish to sign. We value and encourage regional unity in this effort.

We note with concern the opening and expansion of markets for

illicit drugs, particularly cocaine, in Europe and Asia. We call upon the nations of those continents and on other member countries of the international community to strengthen, through bilateral of multilateral agreements, cooperation in the anti-drug effort in which the nations of the Western Hemisphere are engaged. To this end, we have agreed to form a high-level group with representatives designated by the signatory countries of this Declaration, to visit other countries of this Hemisphere, Europe, and Japan, with the purpose of inviting them to participate actively in the efforts and cooperative mechanisms described in this Declaration.

We reaffirm our solid commitment to the anti-drug efforts of international organizations, notably the United Nations and the Organization of American States. Inspired by the mandate of the Inter-American Commission on the Control of Drug Abuse, we express our full support for its programs.

We recognize the fundamental importance of strong economies and innovative economic initiatives to the successful conduct of the anti-drug effort. Further progress in the areas of trade and investment will be essential. We support the Enterprise for the Americas Initiative as a means of improving economic conditions in the Hemisphere, and we are encouraged by the progress the countries of the region have made in restructuring their economies.

We reaffirm the importance of alternative development in the anti-drug effort. We note that the victims of narco-trafficking in the region include those sectors of society that live in extreme poverty and that are attracted to illicit drug production and trafficking as a means of livelihood. We consider that if our efforts to reduce illegal drug trafficking are to be successful, it will be essential to offer legitimate options that generate employment and income.

We propose to achieve the objectives and goals defined above in this Declaration and in its attached Strategies for Action.

Recognizing the need to ensure cohesion and progress in our anti-drug efforts, our governments intend to hold a high-level meeting on an annual basis.

In order to broaden international anti-drug efforts still further, we invite additional countries or representative of groups of countries to associate themselves with this Declaration.

Hecha en San Antonio, Texas, a los 27 días del mes de febrero de 1992, en los idiomas español a inglés.

Done at San Antonio, Texas, on this, the 27th of February, 1992, in the Spanish and English languages.

Por Bolivia
For Bolivia

Por Colombia
For Colombia

Por el Ecuador
For Ecuador

Por México
For Mexico

Por el Perú
For Peru

Por les Estados Unidos de América
For the United States of America

Por Venezuela
For Venezuela